

ESPACIOS Y REGIÓN EN EL PACÍFICO SUR: ¿HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD REGIONAL?*

Odile HOFFMANN

En Colombia los cambios constitucionales y legislativos hacia una aceptación del multiculturalismo (1991 y 1993) llevaron a reconocer la existencia de un nuevo actor social, las comunidades negras, con nuevos derechos asociados. Entre ellos, los más significativos en cuanto propiciaron una movilización política extensa, son los derechos territoriales. La Ley 70 de 1993 permite a los campesinos negros organizados en “consejos comunitarios” reclamar título colectivo sobre sus “territorios ancestrales”, los que vienen ocupando sin título legal, en tierras de la Nación, desde varias generaciones atrás. En su vertiente territorial, la Ley cubija a las poblaciones *rurales, ribereñas, del Pacífico*: tres características que son restricciones serias, ya que cubren una proporción muy reducida de las poblaciones negras en el país. Sólo 13% de la población negra nacional vive en el Pacífico y la mitad de ellos residen en las cabeceras, o sea, en medio urbano. Conocidas estas limitaciones y los debates y estudios que merece (Cf. los capítulos 1 y 6 del libro), queda interesante observar las transformaciones que conocen cerca de medio millón de personas y sobre todo una región muy extensa, a raíz de una dinámica étnica y territorial nueva a partir de 1991.

En el presente capítulo, ponemos el espacio en el centro del análisis, viendo en éste tanto una construcción social como una dimensión que orienta lo social. Es decir, el espacio es consubstancial a la vida social y política, es producto y productor de sentido social. Los cambios en el espacio geográfico traducen y revelan, mas no corresponden automáticamente a las transformaciones sociales, económicas, culturales o políticas de una región dada. Intervienen múltiples procesos

* Este análisis se enmarca dentro del proyecto de investigación llevado a cabo por el Cidse y el Ird entre 1996 y 2000. En este capítulo me refiero básicamente a resultados obtenidos por N. Rivas, C. Agudelo y yo. Otros investigadores aportaron elementos, a los cuales menciono en el texto. Una primera versión de este texto ha sido publicado como artículo de la revista brasilera *Estudos Afro-Asiáticos* (revista do Centro de Estudos Afro-Asiáticos-Ceaa e do Centro de Estudos Afro-Brasileiros-Afro, Universidade Candido Mendes), Rio de Janeiro, Ano 25, Jan.Abr. 01, 2003: 43-74; Barbary y Urrea (editores, 2003).

sistemáticamente los aspectos económicos, territoriales, políticos y sus relaciones mutuas. Pero “local”, en cuanto concierne una extensión espacial determinada y la población que en ella reside: la región sur del Pacífico colombiano.

La Ley 70 de 1993 tiene una doble dimensión, territorial y étnica (Hoffmann, 2001a). Territorial, en cuanto pretende legitimar derechos agrarios —títulos de propiedad— a sus ocupantes históricos en una porción precisa del país. Étnica, en cuanto subordina estos derechos a la pertenencia de los beneficiarios a las “comunidades negras”, entendidas éstas como etnia, al lado de los indígenas. En ambas vertientes, las innovaciones legislativas se basaron en el reconocimiento de una “especificidad” agraria y étnica de los habitantes del Pacífico, es decir, en la existencia de una configuración socio-espacial muy peculiar, que se podría calificar como “dispositivo fluvial-riberaño”. Veremos cómo, aislada y enfatizada por medio de la reconstrucción conceptual de los legisladores y asesores, esta “especificidad” conforta una imagen “ideal típica” de las comunidades negras rurales en el Pacífico.

El segundo dispositivo analizado aquí —el de la “modernización”—, al contrario, pone el acento en los procesos de indiferenciación y universalidad de las sociedades locales, insertas en procesos globales de escolarización, urbanización y proletarianización. A veces se combina con el anterior, a veces le es opuesto, pero los dos siempre se mantienen cercanos y con múltiples nexos familiares, políticos, económicos.

Finalmente, el tercer dispositivo socio-espacial —el de la “movilización político-étnica”—, evidencia la emergencia de configuraciones nuevas, resultados de cruces múltiples entre los anteriores y algunos nuevos, según un proceso de “mestizaje” tal y como lo entiende Gruzinski (1999): una combinación distinta, nueva, elaborada a partir de elementos tomados de patrones originales diferenciados.

Nuestra argumentación seguirá lógicamente este hilo. Después de una rápida contextualización geográfica regional, analizaremos en tres partes sucesivas los tres dispositivos para responder las siguientes preguntas principales: ¿cómo se transforman las estructuras espaciales, territorios, redes, lugares nodales?, ¿cómo intervienen los distintos niveles o escalas, desde lo local hasta lo nacional, en estas transformaciones?, ¿cuáles son los actores que intervienen en estos procesos? y ¿con qué recursos y medios y qué tipo de interacción presentan unos con otros?

“El Pacífico” cubre la franja occidental de Colombia, frente al océano (Fig. 1). Admirablemente descritas por West (1957), las “tierras bajas” del Pacífico son

Figura 1: Los espacios del Pacífico, un juego de escalas



En la llamada “*región biogeográfica del Chocó*”, que se extiende desde Panamá y el golfo de Urabá hasta el Ecuador, se distinguen claramente dos unidades por criterios fisiográficos, climáticos, de vegetación y geológicos:

- El Chocó propiamente dicho, al norte.
- El Pacífico sur, al sur de Cabo Corrientes.

Esta división corresponde además a una diferenciación en las modalidades de poblamiento, así como a las divisiones político-administrativas.

El Pacífico sur se extiende sobre tres departamentos: Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sin embargo, las condiciones geográficas (esencialmente climáticas, fisiográficas, así como las redes hidrográficas) y los patrones de poblamiento y explotación permiten diferenciar dos grandes unidades:

- Al norte, la que comprende la costa Pacífica de los Departamentos del Valle y del Cauca (cuyo principal centro urbano es Guapi), con la ciudad de Buenaventura como polo de atracción.
- Al sur, el espacio que cubre las partes bajas del Departamento de Nariño, siendo Tumaco la ciudad de importancia de esta área.

El Pacífico Nariñense se divide a su vez en tres pequeñas regiones, diferenciadas de nuevo por condiciones geográficas y por los flujos de productos y población que se dan en cada una (influenciadas por las redes de comunicación).

- La región norte (maderera) está volcada hacia Buenaventura, mientras el sur y el centro establecen relaciones privilegiadas con Cali.
- La región de Tumaco (el sur) se dedica más a la agricultura, por sus condiciones climáticas (menor pluviometría), fisiográficas (planicie) y sobre todo históricas (tipo de poblamiento)
- Barbacoas, región anteriormente minera que se encuentra en profunda crisis.

El área sur se confunde con el **municipio de Tumaco**, cuyas características ecológicas, de producción y de comunicación se subdividen en 5 subáreas: una urbana (la ciudad de Tumaco) y cuatro rurales (conocidas bajo el genérico de “los ríos”):

El área sur, del río Mira hasta la frontera con Ecuador, es aislada y con grandes plantaciones —haciendas— de palma africana y ganadería; “la carretera”, a lo largo del eje Tumaco-Pasto, es área de plantaciones de palma (y camaronicultura en la parte baja) y de agricultura; la ensenada comprende cinco ríos principales y una población campesina-pesquera. La costa norte sigue predominantemente pesquera y agrícola.

separadas del interior del país por la cordillera occidental que funge como un obstáculo a la circulación de seres humanos y mercancías. Hasta hoy apenas dos vías de comunicación terrestre relacionan el litoral con el mundo andino, al centro y al sur de la región: las carreteras Cali-Buenaventura y Pasto-Tumaco. Fuera de éstas, la circulación es fluvial o marítima. Cubiertas de bosques y con una pluviometría que se acerca a los mayores niveles del mundo (7.000 mm anuales en Chocó), estas tierras eran de poblamiento indígena (Embera y Waunana al norte, Awa al sur) hasta la llegada de algunos colonos atraídos por la riqueza aurífera de los ríos (desde el siglo XVI, pero sobre todo en los dos siglos siguientes). Las minas, con su organización social esclavista, sembraron las bases de un nuevo tipo de poblamiento. Después de la emancipación legal de los esclavos (1851) y con la caída de la actividad minera en la zona (fines del siglo XVIII), migraciones importantes de población negra, venida desde el interior del país y los piedemontes mineros, contribuyeron a poblar los ríos, mientras los grupos indígenas se retiraban hacia las cabeceras de los ríos. Así, nació una organización social y geográfica original, constituida por pequeños poblados negros distribuidos a lo largo de los ríos, sobre tierras “baldías”, al margen de la norma jurídica y en muchos aspectos de la sociedad nacional.

La zona sur del Pacífico siguió estas mismas pautas, pero conoció a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX un auge comercial basado en la explotación silvestre del caucho, la tagua y más tarde la madera. Así, se instalaron algunos negociantes no-negros en el puerto de Tumaco, que se desarrolla desde entonces, con mucha dificultad, hasta volverse una ciudad de 12.000 habitantes en 1951 y 45.000 en 1973.

El análisis concierne a esta región de Tumaco, que corresponde grosso modo al municipio del mismo nombre (120.000 habitantes en 1993, de los cuales la mitad viven en la misma ciudad). Mantiene nexos estrechos con los demás municipios del litoral nariñense, o sea del Departamento de Nariño (cuya capital, Pasto, se ubica en la cordillera) y con la ciudad de Cali, metrópoli regional del occidente del país, segunda ciudad del país (2,2 millones de habitantes) y tercera entre las áreas metropolitanas.

1. El dispositivo fluvial-riberaño: la cuestión del territorio

Uno de los interrogantes más apremiantes en la actualidad del Pacífico tiene que ver con las aplicaciones y las implicaciones de la Ley 70 de 1993 con respecto a la organización territorial. Una primera etapa de la investigación consiste en el análisis de las configuraciones territoriales vigentes antes de la Ley 70. En la zona de estudio esta fase se llevó a cabo con base en un intenso trabajo de campo en el río Mejicano, ensenada de Tumaco (1997-1999). Este río, a unas cuatro horas de Tumaco en canoa, cuenta con cinco veredas principales, de 100 a 600 habitantes, establecidas desde finales del siglo XIX con la instalación de pobladores negros originarios de Barbacoas, ciudad minera vecina (Rivas, 1999a).

Las modalidades de manejo y apropiación de los espacios en este río, muestran algunas características similares a las señaladas para todo el Pacífico en la literatura especializada. Los habitantes explotan los recursos naturales combinando tiempos y espacios: cultivos de vega y de colinos (coco, cacao, arroz), explotación maderera en los interfluvios forestales, pesca en los ríos o en los esteros, cacería, además de una artesanía doméstica (canastas, herramientas). En algunas zonas también perdura una actividad de minería de oro por mazamorreo. Según las temporadas en el año, algunas actividades son más importantes que otras, y no todas son realizadas por todos: hombres y mujeres participan al cultivo, pero la cacería y el trabajo de la madera (y en general todas las actividades realizadas en el bosque) son exclusivamente realizadas por los hombres. Las mujeres se encargan de las labores domésticas. A este sistema polivalente habría que añadir trabajos de extracción silvestre con fines de comercialización, desde por lo menos fines del siglo XIX. En efecto, los habitantes de los ríos, que son campesinos, pescadores y cazadores, trabajaban también para los negociantes establecidos en la ciudad, para abastecerles en materia prima exportable como la madera fina, el caucho o la tagua (una nuez de palma, también llamada marfil vegetal). Ellos integraban así, al realizar la extracción primaria, las redes internacionales de explotación del medio forestal tropical. Estos negocios se agotaron con la competencia de materias derivadas del petróleo (años 1930-40); sólo sigue la extracción de madera, ya no madera fina cuya exportación fue prohibida en los años 1940, sino de construcción para el mercado nacional (Del Valle y Restrepo, 1996).

La organización social y económica muestra así mismo rasgos compartidos por el conjunto de los pobladores del litoral del Pacífico, debido en gran parte a su historia común de migración y de constitución "reciente" (uno o dos siglos) de los pueblos en él asentados. Tres aspectos han sido particularmente subrayados en los estudios. En el Pacífico las redes de parentesco jugaron un papel preponderante en la construcción de las veredas y siguen estructurando parte de la vida

social local¹; el espacio regional se organiza alrededor de la unidad espacial “río”, que funge como lugar de reconocimiento social y político, tanto individual como colectivamente (Losonczy, Anne-Marie, 1997b; y Oslender, 1998); la combinación flexible de actividades económicas supone unas relaciones ambiguas de inserción/dependencia de las producciones campesinas frente a los mercados externos nacionales e internacionales, desde el siglo XIX hasta hoy (por ejemplo con la madera y el coco). Recordemos que se trata de localidades asentadas en terrenos legalmente considerados como “baldíos”, es decir que no gozaban, en su gran mayoría, de títulos de propiedad. Las normas locales y tradicionales de apropiación son las que rigen el derecho de unos y otros a usar y trabajar las tierras.

A este panorama ya conocido y descrito, la investigación llevada a cabo en Tumaco ha podido aportar precisiones y matices, ya que encontramos fenómenos hasta entonces poco explorados por los estudiosos.

Si bien, “el río” aparece como la unidad fundamental de organización y percepción del espacio social, existe una multiplicidad de espacios de referencia a escalas inferiores —la vereda, el estero, el colino— o superiores —la ensenada, la “región” (de Tumaco en este caso), o la gran región del Pacífico—. Se evidenciaron distintas modalidades de adscripción y legitimación en un territorio y su combinación para construir una noción compleja de “pertenencia”, que está basada en tres pilares fundamentales: el parentesco, la residencia y el trabajo. Según los contextos locales, será uno u otro registro de legitimación el que será activado, las más de las veces en combinación con los demás. Este sistema polivalente, abierto, integra la flexibilidad de las prácticas migratorias y matrimoniales que amplían singularmente los espacios de convivencia e intercambio (ver el capítulo 2 y también, Hoffmann, 1999b).

En el mismo orden de ideas, se nota la flexibilidad de las normas de apropiación y transmisión de las tierras en los ríos (ver capítulo 8 y Rivas, 1999): a cada lugar o espacio corresponden ciertas normas locales de apropiación, que pueden variar en el tiempo y en función de los usos y objetivos asociados a los mismos (recolección, cultivos de autoconsumo o de renta, cacería, explotación maderera)². Por un lado, se pueden diferenciar reglas de acceso a los “colinos” (parcelas cultivadas por un individuo o una familia) o al “centro” (zona boscosa, de uso colectivo de los habitantes del río), bajo el criterio de la apropiación individual o colectiva. Pero otros matices aparecen, cuando, por ejemplo, se reconoce como legítima la recolección de ciertos productos (silvestres o hasta

1. Cf. el modelo aldeano parental de Gilma Mosquera y Jacques Aprile-Gnisset, 1999.

2. Estas características también se habían recalcado, desde otro punto de vista, en el trabajo de Restrepo en la costa norte de Nariño (Del Valle y Restrepo, op. cit.).

frutos cultivados como el banano o el coco) en terrenos ajenos, siempre que se trate de recolección para autoconsumo familiar, mientras la misma práctica es socialmente sancionada para otros productos (madera) u otros fines (venta). El criterio de la “subsistencia” se impone al de la apropiación, sin acabar en una propiedad colectiva: existen así mecanismos locales de regulación y los abusos se ven reprimidos por la comunidad.

Otro de los hallazgos concierne con la gran variabilidad de las prácticas matrimoniales y familiares de los habitantes rurales. No encontramos un modelo privilegiado de alianza matrimonial ni de tipo de hogares³ que sería “específico” de las sociedades negras del Pacífico. La matrifocalidad y los hogares extensos no son regla y ni siquiera son frecuentes. Encontramos, al contrario, una amplia gama de situaciones (hogares nucleares o compuestos, uniones estables o sucesivas, etc.) que coexisten en una misma vereda, o en el seno de una misma familia, sin que se puedan reconocer regularidades o patrones de comportamiento socialmente valorados. Se resaltan incluso procesos de consolidación y estabilización en las composiciones de los hogares, que se observan sobre todo en las veredas de cierta importancia demográfica⁴ (Hoffmann, 1999b). Esta tendencia se verifica tanto en los hogares afrocolombianos de la capital vallecaucana, Cali, como en los de Tumaco y de los pueblos grandes donde predominan los hogares unifamiliares y nucleares, con promedio de 4 a 5 miembros por hogar y cierta estabilidad de las uniones (ver capítulo 1 y Urrea, 1999).

La aproximación multi-escala (la región, el río, la localidad, la familia) pone en evidencia la inserción de los territorios ribereños en espacios regionales de diversa amplitud. Cualquiera sea la perspectiva adoptada (desde la reproducción económica, las normas de apropiación del espacio, las formas de adscripción territorial, las prácticas matrimoniales o familiares), vemos cómo el universo de los ríos se construye en interacción con otros, a la vez que conserva o adquiere rasgos propios y distintos a los vecinos. Si bien, existen fuerzas que tienden al aislamiento y marginación de los ríos (a nivel económico principalmente), también existen prácticas que apuntan a la comunicación y a veces la integración regional, por ejemplo, mediante las migraciones circulares y, de forma mucho más anclada en la cultura del Pacífico, la movilidad de las poblaciones (capítulo 2 y Vanín, 1999).

La descripción de este dispositivo fluvial-ribereño “tradicional” llevó a cuestionar algunos estereotipos que durante mucho tiempo pesaron sobre los estudios

3. Al contrario de lo que encontró Nancy Motta, por ejemplo, en Salahonda de los años 1970, lo que la llevó a interpretar las dinámicas familiares en términos de matrifocalidad y alta movilidad matrimonial, Motta (1975).

4. Coincidiendo con lo encontrado por Mosquera y Aprile-Gnisset (1999).

y los mismos habitantes del Pacífico, como son las supuestas especificidades de las poblaciones negras en cuanto a las uniones múltiples, la matrifocalidad, la migración pendular, la propiedad colectiva, etc⁵. En el Pacífico, las prácticas y las normas de apropiación del espacio, entendidas en su sentido amplio como unas “maneras de estar en el mundo”, conforman efectivamente un “sistema” distinto al de las poblaciones andinas, por ejemplo. Pero son resultado de construcciones sociales, en tiempos y espacios concretos, sin que reflejen una especificidad “cultural” inmutable y perenne.

Este debate sobre la “especificidad cultural” se refleja en las categorías analíticas usadas en las descripciones. Tomaremos el ejemplo del término “campesino”, que sigue suscitando polémica entre los estudiosos del tema. Desde hace varios años, Aprile-Gniset (1992a y 1992b) y Mosquera (2000) ya han descrito el modelo de poblamiento ribereño que asocia el hábitat lineal, a lo largo de los ríos, con un uso y control del espacio rural productivo organizado en “colinos” y “lotes” apropiados individualmente, según una lógica “campesina” de explotación de los recursos naturales. Sin embargo, otros estudiosos refutan esta interpretación, arguyendo sobre la alta movilidad y precariedad de los asentamientos en el Pacífico, resaltando además el manejo colectivo del espacio (los “centros”). Planteamos que no existen contradicciones entre ambas interpretaciones. Los pobladores negros son campesinos en cuanto tienen una relación privilegiada con el campo, del cual sacan medios de subsistencia y reproducción y el cual modelan en función de lógicas sociales de negociación y control del espacio, combinando modalidades individuales y colectivas. Es menester aclarar que para nosotros, dado el contexto sociogeográfico del litoral, “ser campesino” supone obviamente combinar las actividades de agricultura con las de pesca, recolección y cacería, así como cada vez más, el trabajo asalariado permanente o temporal, en los campos o en la ciudad. Se puede explicar la reticencia de ciertos académicos a usar la categoría de “campesinos” por la voluntad de tomar distancia frente a la tradición andina e indígena que tradicionalmente se asocia a ésta. Traduce el afán de “particularizar” la situación de los pobladores negros con el fin de contrarrestar la “invisibilidad” de las comunidades negras por parte de los políticos y de las instancias gubernamentales como el Incora⁶. Sin embargo, en el plano académico, esta postura conlleva el riesgo de “esencializar” una identidad negra “culturalmente distinta” y de soslayar una dimensión socio-económica que los mismos habitantes negros reivindican al nombrarse “campesinos” o “agricultores”.

5. Este cuestionamiento también se dio, en el proyecto, desde otro enfoque, con las miradas antropológicas de Quintín (1999) y las de Vanín (1999) sobre migración.

6. Instituto Colombiano de Reforma Agraria.

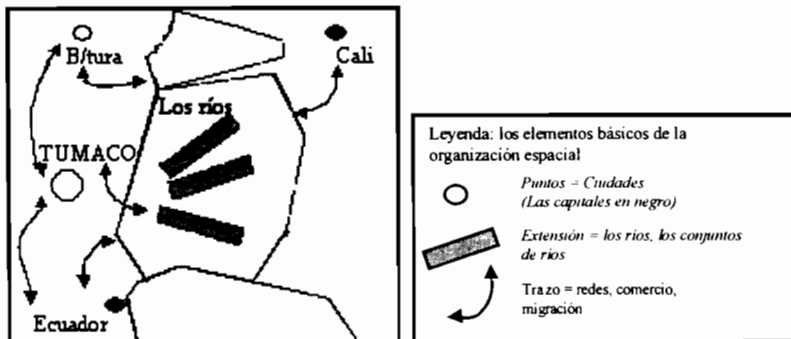
Como se puede constatar, esta descripción del dispositivo fluvial-riberaño enfatiza la diversidad y la flexibilidad en las formas de acceso, apropiación y manejo del espacio, así como en las características sociodemográficas de las poblaciones. Estamos frente a lógicas de funcionamiento que no admiten límites fijos ni compartimentos —ni en el espacio ni en la sociedad—, menos aún normas rígidas y fijas en el tiempo. Al contrario, este dispositivo permite la integración y circulación de hombres y mujeres, así como de ideas y valores, en un espacio globalmente organizado alrededor del río pero no restringido a él⁷. Podemos reconocer una *territorialidad* asociada a este modelo, que combina y articula varias escalas (ver figura 2):

- El nivel del río y los ríos vecinos (en el caso del Mejicano este conjunto lo representa la ensenada de Tumaco) en el que se da la movilidad de proximidad; es el espacio de nupcialidad privilegiado en un primer momento histórico, después de la fundación de las veredas, donde se construyen las primeras redes de parentesco (ver capítulo 2); es también el espacio de relaciones sociales e intercambios diarios (de comida, bienes, servicios, trabajo e informaciones).
- Este ámbito interactúa fuertemente con la ciudad de Tumaco, que se conecta con los ríos al formar parte del espacio de nupcialidad en las generaciones siguientes, pero sobre todo en cuanto lugar de migración, de trabajo, de acceso a servicios públicos (educación y salud) y a veces de doble residencia.

Figura 2: el dispositivo fluvial-riberaño

Los referentes espaciales en el suroccidente del Pacífico

(en las tres situaciones se mantienen lazos con el exterior de la gran región, no representados en los esquemas)



1. El dispositivo fluvial-riberaño:
 - El río y los ríos vecinos.
 - Algunos puntos exteriores.
 - Movilidad de proximidad en la articulación con Tumaco ciudad.

7. Es por esta razón que no usamos el término "territorio" en esta configuración socio-espacial; en cambio, será fundamental en el tercer modelo analizado, el de la movilización política, que se construyó en gran parte sobre esta noción.

región hasta hoy. Retomando aspectos parciales del mismo, e interpretándolos bajo la luz de las “especificidades culturales” de las poblaciones negras, varios académicos y militantes lucharon por el reconocimiento de derechos territoriales en el Pacífico, dando paso a la formulación de la vertiente territorial de la Ley 70 (Arocha, 1999; Wade, 1994; Hoffmann, 1998b; Agudelo, 1999a y b). Querían así prevenir un acaparamiento de tierras y un despojo de territorio que se venían dando en algunas partes con gran celeridad, como lo vemos en el segundo modelo propuesto.

2. La modernización en el Pacífico sur (años 1950-70)

A partir de los años 1940-60, la llegada de capital agroindustrial foráneo a la región del litoral, sea bogotano, valluno o de los Llanos Orientales (además de algunos extranjeros que históricamente siempre han estado ahí), conlleva nuevas formas de explotación de los recursos locales y del trabajo: intensificación del asalariado, proletarización del o la trabajador(a) y su familia. Explotación masiva de la madera en terrenos “baldíos” dados en concesión a grandes empresas, haciendas ganaderas, plantaciones de palma africana y piscinas de camaronicultura contribuyen a trastornar el paisaje del litoral, sobre todo en los alrededores de la ciudad de Tumaco.

Esta dinámica está apoyada por el Estado en dos vertientes principales: la asistencia técnica y la regularización en la tenencia de la tierra. La primera se traduce por la implantación de una estación agronómica en Tumaco, destinada a difundir las tecnologías apropiadas a los sistemas “modernos” de producción (semilla mejorada, pesticidas y fertilizantes), sobre todo para el arroz por el lado campesino y la palma africana por el empresarial. La “regularización” de la propiedad está a cargo del Incora. Esta institución procede a entregar títulos individuales de propiedad sobre algunos predios campesinos, muchas veces asociando la entrega del título al otorgamiento de créditos agrícolas por la antigua Caja Agraria para “cultivos tecnificados” (arroz principalmente). Los fracasos técnicos llevan en numerosos casos al no reembolso de créditos, seguido de embargos por parte de la Caja Agraria que vende los predios a los grandes empresarios ganaderos o agrícolas. Así, la “modernización agrícola” en esta zona se traduce en pérdida de tierras y de recursos para los campesinos (Agier, 1999a), y en el desarrollo espectacular de haciendas ganaderas y de palma africana alrededor de la carretera Pasto-Tumaco (años cincuenta y sesenta).

En otras partes del litoral nariñense intervinieron también razones “naturales” para socavar la viabilidad del sistema anteriormente descrito: una plaga afectó los cultivos de coco desde Timbiquí hasta la frontera, en 1972-74, pero sobre

Los sistemas de residencia incluyen ahora nuevas modalidades, como la doble residencia (río-Tumaco) y la emigración de hombres y sobre todo mujeres jóvenes a Tumaco y Cali mientras se debilitan los lazos entre los ríos. Paralelamente las redes de nupcialidad se distienden y abarcan nuevos espacios o puntos (los de emigración), modificando profundamente las relaciones de parentesco que solían estructurar los espacios rurales. Tercer pilar del modelo anterior, el trabajo mismo ya no es suficiente para asegurar la reproducción social, ni siquiera familiar, en el río (agotamiento de las buenas tierras y problemas de producción ya evocados).

Producto de estas dinámicas, la ciudad de Tumaco conoce un crecimiento demográfico sin precedente (dobla su población entre 1960 y 1973). Familias enteras, o mujeres con sus hijos van a la ciudad en busca de mejores opciones para la escolaridad y la salud. Los jóvenes encuentran trabajo en los aserraderos que por estos años (1960-70) se multiplican (Restrepo, 1997a) o en las plantaciones de palma africana recién instaladas. Las jóvenes salen del campo, preferencialmente para Cali o las grandes ciudades del país, muchas veces para emplearse en el servicio doméstico. La población de la ciudad de Tumaco cambia con estas olas de migración —algunos hablan de la “recolonización negra” de la ciudad, anteriormente dominada por las elites blancas—, pero las infraestructuras (agua, luz, viviendas) no siguen el ritmo, desembocando en una fisonomía urbana fragmentada y altamente marginada (Restrepo, 1999a).

Este franco abandono de la región sureña se debe entender también a la luz del sistema político regional que impera en estos años; a saber, un gamonalismo exacerbado (Helfrich, 1998) liderado por Alberto Escrucería —conocido como Beto—. Este jefe político liberal logra tener un casi monopolio político en esta región durante 30 años (1950-80), con base en un clientelismo muy personalizado, por un lado, y el apoyo pasivo de los grupos liberales a escala nacional, por el otro. La “edad de oro” del “betismo” aprovecha la modernización y el crecimiento de Tumaco para consolidar su feudo, logrando adhesión popular al enaltecer la “identidad tumaqueña”, explotando de esta manera los viejos antagonismos geopolíticos entre el litoral —población negra, liberales— y la sierra vecina —población andina, conservadores (Hoffmann, 1999a).

Frente a las innovaciones económicas y territoriales arriba mencionadas, muchos nativos rurales mencionan los procesos traumáticos de ruptura que vivieron, frente a la pérdida de sus tierras o de su autonomía. Pero no existen, en aquella época, formas de expresión colectiva que traduzcan este malestar. El dispositivo político está bloqueado por el “betismo” y las movilizaciones populares todavía no se desarrollan. Sin embargo, empiezan a elaborarse estrategias de adecuación a las nuevas lógicas. Al principio son individuales, pero anuncian

de un hombre y una mujer en sus trabajos en una plantación de palma africana, revelan la importancia de esta actividad en la conformación de la territorialidad regional en el sur del Pacífico (llanura de Tumaco). La fotografía 5 resalta un evento hoy en día de la región, el Carnaval de Tumaco, ejemplo de identificación cultural y social contemporánea de este territorio, a pesar de la pérdida del papel de significación económica del mismo, para un importante sector de sus antiguos pobladores.

3. Tiempos de movilización étnica: vuelve el territorio

En Colombia el contexto nacional de los años 1980 está marcado por las medidas de apertura económica, descentralización y democratización¹⁰, y por las dinámicas políticas que desembocan en la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1991 y posteriormente en la Ley 70 de 1993. Esta ola de reformas fue precedida por fuertes movilizaciones políticas en todo el país (numerosos paros cívicos y protestas), expresiones de la crisis del modelo clientelista redistribuidor. Este conjunto heterogéneo de reformas, rupturas y participación popular también se dio en el Pacífico sur, asociado a procesos regionales de transformación económica, política y de reivindicación identitaria.

A nivel económico, se acentúa el afianzamiento del capital agroindustrial alrededor de Tumaco (Escobar, 1996), con una presión creciente sobre los recursos en tierras y trabajo en la zona de la carretera, para ampliar las áreas de palmicultura que hoy sobrepasan los 20.000 hectáreas (Cega, 1999). El fracaso del intento de industrialización maderero en los años 1970, aliado a la precarización de la agricultura campesina y la pesca artesanal frente a los industriales, provoca un desempleo muy alto y un descontento generalizado que encuentra expresiones variadas.

La movilización popular suscita, a la vez que se fortalece con ella, la emergencia de actores locales apoyados por las Ong (Plan Internacional Padrinos), los programas de desarrollo que por estos años se implementan en el Pacífico —en Tumaco es sobre todo la Cvc¹¹— y la Iglesia Católica que inicia una línea de

10. Entre las medidas importantes asociadas a la Ley de descentralización está la elección popular de alcaldes, en lugar del nombramiento de los alcaldes por el gobernador del Departamento, como era antes.

11. Corporación Autónoma Regional para el Valle del Cauca. Institución hoy en día adscrita al anterior Ministerio de Medio Ambiente, la cual fue encargada de proyectos de desarrollo en la parte sur del Pacífico colombiano hasta fines de la década de 1990, cuando se constituyen corporaciones en cada Departamento. En Nariño, la Cvc fue particularmente activa en la década de los noventa, por sus programas de desarrollo rural en cooperación con el gobierno de Holanda.

pastoral negra en los años 1980. Sean masivas o puntuales, a veces violentas¹², estas expresiones populares (Pardo, 1997) participan de una misma reivindicación de protagonismo frente a un Estado ausente y un capital cuyas lógicas y exigencias invaden todas las esferas de la vida regional. Las vías tradicionales de negociación clientelista se agotan y el “betismo” se debilita —y con él algunas redes regionales del litoral nariñense ligadas al caudillo—, mientras se estructura una competencia político-electoral alrededor de fracciones locales del liberalismo (Helfrich, op. cit. y Hoffmann, 1999a).

Nacida de la misma demanda por más participación, en el contexto de la Asamblea Constituyente, otra vertiente de la movilización se organiza en torno a la reivindicación étnica negra (ver capítulo 7 y Agudelo, 1999a). La coordinación regional del Proceso de Comunidades Negras: Palenque (en un principio ella unificada y hoy bastante fragmentada y debilitada), acompaña las organizaciones de base para constituir consejos comunitarios y promover la titulación de territorios colectivos, en el marco de la Ley 70. En este proceso, campesinos, líderes y asesores externos combinan esfuerzos y a veces se enfrentan entre sí, para elaborar los expedientes necesarios a la titulación colectiva de las tierras de las comunidades negras (Villa, 1998). Esto implica seguir las pautas marcadas por la Ley, entre las cuales está la necesidad de reconstruir la memoria social y geográfica de la comunidad (historia de la fundación y genealogías). Esto significa llevar una reflexión colectiva acerca del territorio, de la identidad y de la relación entre ambos. Se trata pues de construir consensos —o de lograr imposiciones— en torno a nuevos conceptos que van asociados a la figura de “territorio colectivo de comunidades negras”: la identidad étnica, la gestión colectiva, pero también el significado y el papel de nuevas instituciones locales como el consejo comunitario, la asamblea de pobladores o la junta de gobierno, entre otras.

La titulación de territorios colectivos, lejos de reducirse al simple reconocimiento de derechos territoriales anteriormente adquiridos, determina nuevas formas de manejar y dividir el espacio y nuevas relaciones entre los actores interesados. En este largo caminar, los campesinos a veces se apropian de nuevas técnicas y modos de pensar su espacio, por ejemplo, mediante la elaboración de mapas y la reconstrucción histórica de sus territorios. Por su lado, los asesores y militantes, urbanos en su mayoría, aprenden o re-aprenden valores “rurales” y pueden llegar a modificar algunos de sus planteamientos teórico-políticos para tomar en cuenta ciertas prácticas locales que habían soslayado (Hoffmann, 2000a). Se da

12. En 1988 unas manifestaciones en contra del deterioro del servicio público en Tumaco terminan en una confrontación violenta en el centro de la ciudad, la destrucción de edificios públicos, varios incendios y hasta una persona muerta. Este episodio es conocido como “el Tumacazo” en referencia al “bogotazo”, de 1948, que marcó el inicio de la Violencia en Colombia.

así, alrededor del espacio local y de su control, una interacción entre ámbitos sociales distintos pero reunidos en esta ocasión alrededor de la solicitud de titulación.

A la fecha de julio 2003, se habían realizado 27 titulaciones de territorios colectivos de comunidades negras en Nariño (concernientes a 342 veredas y 721.000 hectáreas), mientras otras tantas están en trámites: 15 solicitudes, para 58 veredas y 175.000 hectáreas. A nivel nacional, es decir para todo el Chocó biogeográfico, el total de superficies tituladas asciende a 4.612.000 hectáreas ubicadas en 1.184 veredas, mientras otras 1.147.000 hectáreas se encuentran en proceso de titulación (cf. Incora, 2003 y Mapa 1¹³). En julio de 2003, estas tierras representaban el 4% del territorio nacional y el Incora espera que al final de 2004¹⁴, la titulación de los territorios colectivos de la Ley 70 alcance un total de 5.760.000 hectáreas, o sea 5% del territorio colombiano (ver también el capítulo 9). Este proceso de titulación colectiva conoce una aplicación diferencial en función de los actores presentes. En el Chocó, donde se planean macroproyectos y se enfrentan guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, los beneficiarios campesinos de los territorios recién titulados son masivamente desplazados por las violencias. En Nariño, los territorios eran hasta hace poco tiempo relativamente poco codiciados por estos actores, lo que permitió una movilización campesina y un proceso de titulación conforme a la Ley (con todos los matices amparados por las ambigüedades de la misma, cf. Agier et Hoffmann, 1999). Pero, como lo veremos más adelante, los recursos económicos y geoestratégicos de la región sur también despertaron el interés de muchos actores legales e ilegales, armados o no, cuyo “encuentro” y confrontación llevan hoy al aumento espectacular de la conflictividad regional (Sánchez, 2001; Hoffmann, 2002a). Al respecto, la ilustración 1 (cubiertas de publicaciones del Departamento Nacional de Planeación y del Incora) hace alusión al enfoque institucional, a partir de la Ley 70 de 1993, sobre el manejo de las tierras en el Pacífico, con amplia difusión en el municipio de Tumaco en los últimos años.

La interacción entre los niveles nacionales, regionales y locales, por una parte, la retroalimentación entre procesos políticos, económicos y culturales, por otra

13. El mapa fue realizado con los datos disponibles a octubre de 2001. Para esta fecha, la superficie titulada a través de la Ley 70 eran de 378.000 has. en el departamento de Nariño, 327.000 has. en el Cauca, 176.000 has. en el Valle, 1.610.475 has. en el Chocó y 204.000 has. en Antioquia; para un total de 2.686.000 has. En proceso de titulación se encontraban 296.000 has. en Nariño, 88.000 has. en Cauca, 132.000 has. en Valle, 1.276.000 has. en Chocó, 25.000 has. en Antioquia y 5.000 has. en Risaralda; para un total de 1.823.000 has. Ya hacia diciembre del 2001, según datos del Incora, existían 64 títulos colectivos compuestos por 2.695.475 has. en el Pacífico, que beneficiaban a 27.338 familias y 144.053 personas; además, a la misma fecha, estaban en proceso 84 solicitudes de titulación que cobijaban 2.304.525 has. y 26.700 familias.

14. Informe del Incora al 30/07/2003.

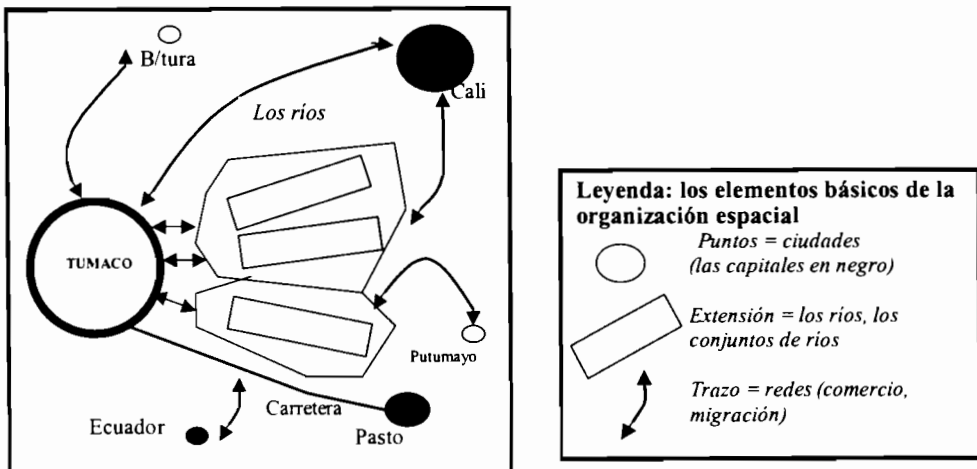
parte, desembocan en la última década en profundas transformaciones en las lógicas del “funcionamiento” regional. Entre otras, la dimensión migratoria adquiere otro matiz, con impactos evidentes en las estructuras demográficas de los lugares de expulsión y de llegada. Las tendencias demográficas en el Pacífico se acercan a los perfiles generalizados en el país, marcados entre otras características por unas tasas de masculinidad altas en el campo y una feminización de las ciudades. No salen los más jóvenes, ni los más pobres, sino que se nota un aumento de migración de sectores con mayor capital escolar. Los destinos mismos de migración se diversifican (Cf. capítulos 1 y 2). Al lado de Cali y Ecuador aparecen Nariño-interior, Putumayo, Venezuela (encuesta en el río Mejicano 1998; y Vanín, 1999). Sin embargo, es notorio que algunas de estas redes se consolidan, especialmente las que unen la región de Tumaco con Cali.

Se pueden hacer varias lecturas políticas de esta nueva configuración socioespacial (figura 4), entre ellas dos principales: una que apunta hacia la construcción de una sociedad regional, otra que enfatiza las fuerzas de fragmentación del espacio social y político. Serían como dos posibles escenarios futuros, que presentamos antes de describir, en conclusión, una situación presente más bien aterradoradora.

Figura 4: ¿el dispositivo de la integración o de la fragmentación?

Los referentes espaciales en el suroccidente del Pacífico

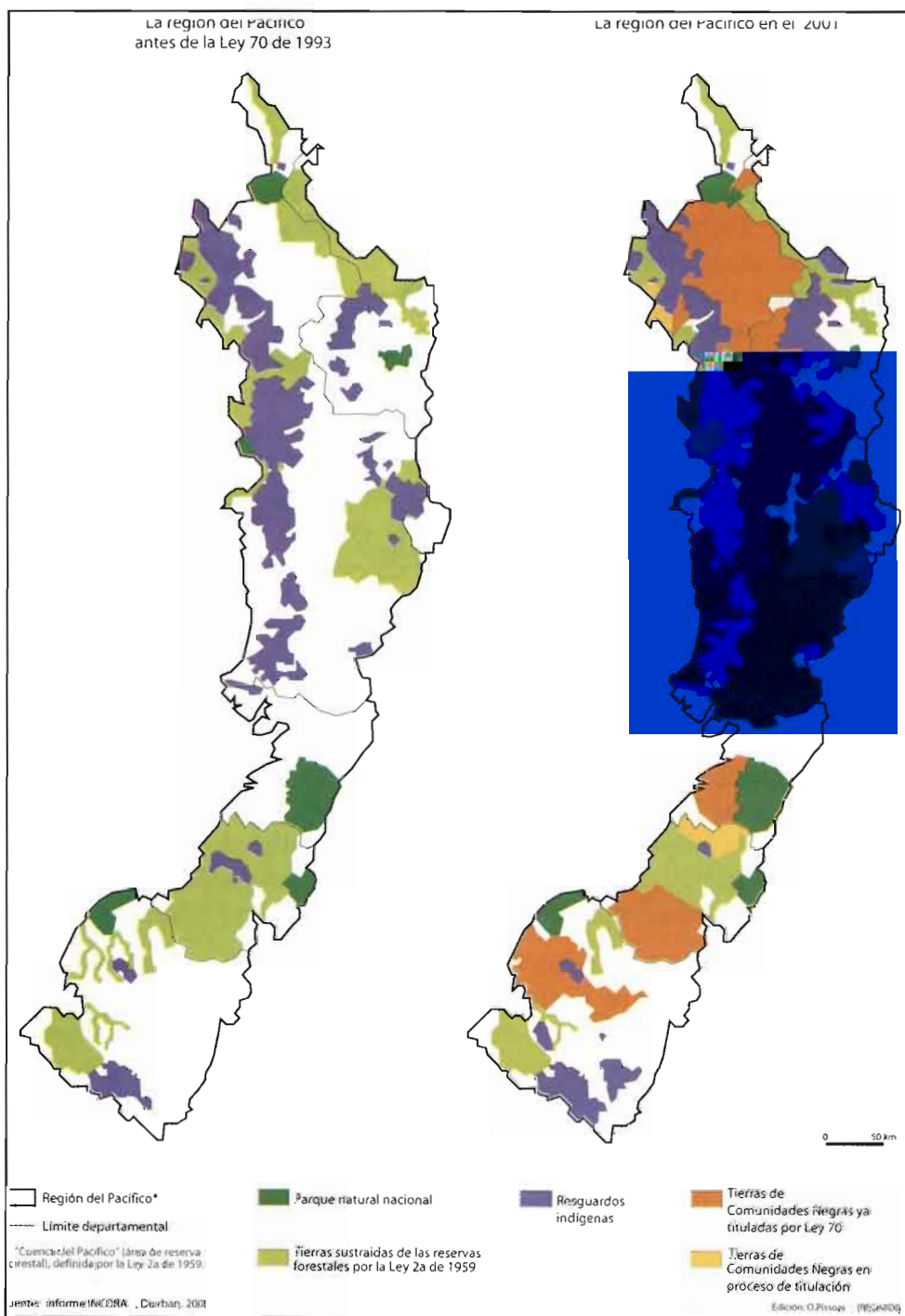
(En las tres situaciones se mantienen lazos con el exterior de la gran región, no representados en los esquemas)



3. ¿Hacia la integración?:
 - Revalorización de los ríos en cuanto territorios (consejos comunitarios) negros
 - Mayor integración con Pasto.

- Sigue el polo de Tumaco.
- Disminuye la importancia de Cali y aparecen otras redes (Putumayo)

Mapa 1: Los cambios en la tenencia de la tierra con la Ley 70



Hacia la construcción de una sociedad regional

Los últimos años propiciaron la emergencia de actores locales más potentes, diversos y numerosos. Hoy los líderes de las organizaciones étnico-territoriales, pero también los políticos, las Ong o los gremios pueden acogerse a instrumentos de legitimación nuevos y reconocidos como son la Ley 70, las medidas de descentralización o el interés renovado del gobierno central para la zona, por razones político-estratégicas. Para los pobladores negros, aunque sea de manera dispersa y fragmentada, se elaboran nuevos espacios de autonomía alrededor de los territorios colectivos titulados y de un vasto “territorio-región” de las comunidades negras en el Pacífico. Esto les permite asegurar el control de las tierras a la vez que les abre nuevas vías de inserción en los programas, gubernamentales o no, que se encargan de financiar proyectos alternativos de desarrollo en el Pacífico. El territorio se vuelve recurso en sí, sobre todo en el marco de proyectos de “desarrollo sostenible” que pretenden privilegiar las comunidades campesinas y étnicas por su papel en la conservación de los recursos naturales. Como se analizó con detalle en un consejo comunitario (Acapa, municipio de Pizarro), la titulación colectiva puede dar paso a un empoderamiento por parte de las comunidades o de algunos de sus líderes —con sus evidentes limitaciones—, llegando incluso a fomentar una nueva institucionalidad local basada en la defensa de la biodiversidad (ver capítulo 8 y Rivas, 2000). Por otro lado, cierto desarrollo económico se da alrededor de las actividades agro-industriales y del desarrollo urbano, con pasos hacia la integración con la sierra vecina y el interior del país (Pasto). La marginación geográfica de la región frente al país, eterna fuente de queja por parte de los tumaqueños, tendería a disminuir. Estos dos “pilares” de la dinámica regional —los territorios negros y el sector agro-industrial— se apoyan en recursos y discursos legitimados de afuera pero reapropiados y movilizadas por actores locales (discurso étnico y biodiversidad, por un lado, progreso económico e integración macro-regional, por otro).

La sociedad regional se podría desarrollar con base en la complementariedad entre estos dos proyectos, siempre y cuando existan canales de discusión y negociación entre ambos. En el contexto del Pacífico el término “*sociedad regional*” no es neutro ni retórico. En efecto, el vocablo “sociedad” casi no se oye cuando se habla del Pacífico, que todavía se percibe como un espacio donde viven “grupos”, “poblaciones”, “comunidades”, “veredas”, “gente”, palabras seguidas inmediatamente del adjetivo “negro” o “negra”. La concepción mayoritaria sigue viendo en el Pacífico colombiano un conjunto de entidades sociales elementales y separadas, significantes sobre todo por su pertenencia étnico-racial. De alguna forma se opone, tal y como lo hacía Tönnies ([1922] 1977) en su teoría clásica, la “sociedad” (*gesellschaft*), noble en su modernidad, a la “comunidad”

(*gemeinschaft*), reducida a ciertos territorios y registros de legitimación¹⁵. La noción de “comunidades negras” elaborada desde la Constitución de 1991 por intelectuales y militantes étnicos, reviste ciertamente otro significado, que entre otras cosas rebasa fronteras geográficas para proponer un sentido “ciudadano” de la identidad étnica. Las “comunidades negras” de hoy se reivindican como parte activa de la Nación y de la modernidad. Sin embargo, esta innovación conceptual y política no puede borrar siglos de estigmatización y reducción de toda una población organizada a su sola característica “cultural” o “racial”. Proponer acuñar el término de “sociedad regional” traduce la voluntad de desparticularizar el Pacífico, reconociéndole unas dinámicas sociales, económicas y políticas que se entienden por el contexto actual y sus antecedentes históricos, más que por una supuesta “especificidad cultural” negra. En cuanto miembros de una “sociedad regional”, como existen otras en el país (la región paísa, la región costeña, etc.), los habitantes se entienden como ciudadanos a la vez que como “comunidades negras”.

De la misma manera, el término región (más común es cierto) representa todavía un reto para los habitantes, las organizaciones y los políticos para concebir acciones que deriven en una verdadera construcción regional. No es casual que la Agenda XXI para el Pacífico (2000) haya adoptado como lema “Hacer región”, en aras de juntar iniciativas y propuestas de desarrollo para los próximos 25 años.

Los factores de fragmentación social, política y territorial

Las dinámicas actuales consolidan lógicas político-territoriales por parte de grupos que se legitiman en registros distintos, llegando en concreto a una yuxtaposición de espacios de estatutos diversos: territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas, grandes plantaciones privadas, concesiones madereras, reservas naturales, etc. Pero el espacio no es extensible y empiezan a darse situaciones de competencia territorial que adquieren matices étnicos, socioeconómicos o políticos según los casos. Cada “grupo” lucha por obtener recursos propios, amparado en un dispositivo jurídico-legal y un aparato institucional específico (Ley 70 para las comunidades negras, Ley 60 para los indígenas, leyes fundamentales de la propiedad privada para los agro-empresarios). La fragmentación territorial, étnica y política tiene entonces sustento legal, cuando los habitantes de los distintos tipos de territorios no se acogen a las mismas legislaciones.

De hecho, los conflictos entre organizaciones étnico-territoriales negras y grupos indígenas —sean familias o resguardos enteros— se multiplican a medida

15. La concepción de “comunidad” cerrada y autónoma y su evolución hacia la integración a la “sociedad”, fue desarrollada, entre otros, por Redfield (1944).

que se confirman las titulaciones de territorios colectivos (sobre todo en Chocó). En Nariño los conflictos oponen principalmente los consejos comunitarios a empresarios agroindustriales palmicultores. Estos últimos se apoyan en las políticas nacionales de desarrollo de la agricultura comercial para afianzar su presencia iniciada en los años 1950 y proseguir una expansión espectacular en los últimos dos años, en especial en la región del río Mira. Compitiendo por espacio con proyectos de territorios colectivos, promueven entre los pequeños agricultores negros un proyecto de desarrollo agrícola en asociación con ellos, prometiéndoles crédito, asesoría técnica y garantía de compra del producto. Les ofrecen además ciertas facilidades para titulaciones individuales de sus parcelas, con lo que se enfrentan brutalmente a los consejos comunitarios que gestionan la titulación colectiva sobre las mismas tierras. En efecto, en la lógica agroindustrial, la consolidación de los derechos de propiedad es condición necesaria para suscitar mayor circulación de bienes, productos y trabajadores, e integrar a los pobladores negros en su sistema de producción. Ambos “proyectos”, el empresarial y el étnico-territorial, se enfrentan en condiciones de enorme desigualdad de recursos económicos y políticos. El primero goza de capital propio y apoyo nacional indefectible, mientras el segundo difícilmente logra reunir esfuerzos y voluntades para construir un proyecto alternativo.

Hace un poco más de cuatro años (Agier et Hoffmann, 1999), podíamos presentar así las tendencias opuestas de un dispositivo socio-espacial muy original, y discutir sobre sus posibles desarrollos. En aquel momento nos preguntábamos: ¿cuánto tiempo puede durar esta situación “esquizofrénica”, donde cohabitan en un mismo espacio actores anclados en lógicas de poder y de expansión territorial, bien armados aunque sea con armas de distintos tipos (económica, política, militar)? Todo parece indicar que ya tenemos respuesta y que la historia regional se fue por el camino del enfrentamiento y la violencia, como veremos a continuación.

Conclusión: el devenir ya es pasado, una región hacia la anomia

En los dos o tres años la situación se ha vuelto preocupante. Los cultivos de coca se extienden en los campos. El control de las tierras bajas productoras de coca, de una parte y la constitución de un corredor entre la zona de despeje de las Farc y el océano Pacífico, de otra¹⁶, han llevado las guerrillas a acentuar su presión sobre el Pacífico. Al mismo tiempo, las fuerzas paramilitares, presentes

16. En una entrevista con un periodista en mayo 1999, Manuel Marulanda (“Tirofijo”) planteaba claramente las aspiraciones de las Farc en controlar una vía al mar de la zona sur del país.

nuevo a un enfrentamiento entre las tres facciones del liberalismo que se comparten el poder local desde hace décadas (cf. Hoffmann, 1999a).

El manejo complejo del espacio por parte de los distintos actores locales y regionales nos lleva a plantear la categoría de “capital espacial”, siguiendo a Levy (1994): un capital multivalor (*polyvalent*), que como cualquier capital es “cambiable”, es decir, susceptible de generar intereses “realizables” bajo otras modalidades, principalmente políticas y económicas, pero también en capital social o capital cultural (Levy, op.cit). En el contexto nacional colombiano esta categoría analítica es de evidente pertinencia para entender las actuaciones de los grupos guerrilleros y paramilitares; tanto en el marco de las negociaciones de paz como en el de la guerra, el control territorial es decisivo para adquirir poder. En el Pacífico se vuelve asimismo una noción que ayuda a entender los procesos contradictorios que se tejen alrededor de las reivindicaciones étnicas. Los territorios colectivos representan a menudo, para las poblaciones rurales negras que ya lograron la titulación, su único capital reconocido por las agencias gubernamentales. Se volvieron así un recurso para acceder al mundo de las instituciones, pero al mismo tiempo son también un escenario de competencia con los vecinos. El “*espacio étnico*” es ahora codiciado y peleado en cuanto tal, mientras el mismo espacio geográfico se ha vuelto objeto de inversiones financieras cuantiosas por parte de actores foráneos a la región. El control y la apropiación del espacio es objeto de negociación y competición, arreglos, y acciones llevadas por actores que disponen de medios desproporcionados entre sí y tienen objetivos variados (movimientos sociales, pero también acciones individuales, sociedad civil, partidos, etc).

Los procesos de transformación socio-espacial que hemos descrito y los esquemas que presentamos para cada configuración, demuestran una vez más que el espacio geográfico no determina nunca, de por sí, dinámicas sociales o políticas particulares, pero que éstas tampoco se pueden librar de la dimensión espacial. Los ejemplos citados mostraron cómo un territorio marginado y aislado se vuelve estratégico en el marco del conflicto armado, cuando otro decae por culpa de una iniciativa individual que le quitó todos sus recursos (por ejemplo, el canal Naranjo). Algunas políticas conciernen tierras y espacios concretos (los ríos) mientras otras se fundan en criterios étnicos, pero todas tienen consecuencias sobre la organización regional. La morfología del espacio regional cambia según las funciones que asumen sus distintas partes para los distintos actores, en un contexto histórico dado.

Las dinámicas socio-espaciales se asocian a cambios de otro orden, sea económico, cultural o político. En estas interacciones el análisis evidenció procesos de retroalimentación entre los niveles del centro y de las periferias, de lo local y de

lo global (ver también el capítulo 7). Las transformaciones político-étnicas, por ejemplo, suponen *procesos creativos* por parte de los actores individuales y colectivos que intervienen en ellas, como pueden ser procesos de recuperación e invención de la tradición para algunos o de elaboración de nuevos esquemas de participación ciudadana para otros. En ambos casos exige de los actores, campesinos de base o dirigentes de organización étnico-territorial, una cierta capacidad para jugar con los distintos niveles y registros de legitimación.

Por otra parte, los actores intervienen con capitales sociales, políticos, económicos y culturales variados y sumamente desiguales. La negociación entre los actores locales, entre ellos y el Estado o los actores regionales, es en sí una innovación que requiere de un aprendizaje, a veces brusco e incluso violento. En este proceso de aprendizaje aparece una nueva categoría “sociopolítica”: la de los *mediadores* (“brokers” en inglés o “courtiers” en francés), compuesta por asesores, dirigentes, militantes de Ong o expertos locales. Son personas capaces de manejar lenguajes distintos y de elaborar “traducciones” entre mundos distintos (por ejemplo, el campesino y el administrativo, o el empresarial y el político) y sobre todo son gente que “saben” de los dos mundos, porque, de alguna manera, pertenecen a ambos. En momentos de fuerte recomposición como es el caso en Colombia, se vuelven rápidamente actores que aspiran a reestructurar los escenarios políticos y las maneras de intervenir en ellos. En el Pacífico, son ellos los que difunden los discursos “universales” (etnicidad, derechos humanos, medioambiente, biodiversidad) hacia el campo, a la vez que controlan los recursos monetarios que están asociados a través de la elaboración de múltiples “proyectos” que hoy estructuran la vida asociativa en el Pacífico como en otras regiones del país y del planeta.

La “modernización” (escolarización, comunicación, entrada de capital) y la “modernidad” (la individuación vía etnicización, ecologización de los discursos) implican nuevos modelos de sociabilidad en los que “la ciudad” juega un papel preponderante. La urbanización de las poblaciones del Pacífico es un hecho que ya no se puede menospreciar, tanto en las regiones (Buenaventura, Quibdó, Guapi, Tumaco) como en las principales ciudades del país, por efecto de las migraciones. Cali, destino principal de los migrantes del Pacífico sur, adquiere una posición central en el dispositivo socio-migratorio de nivel macrorregional y aún nacional (capítulos 1, 2, 3 y 6). Estos cambios vuelven más complejas las construcciones de identidades, que se han elaborado principalmente hasta hoy y para las comunidades negras, desde lo rural y lo territorial, pero que ahora atañen a toda la población afrocolombiana (capítulos 6, 7, 8, 9 y 10).

ESPACIOS Y REGIÓN EN EL PACÍFICO SUR



Foto No. 1: Vista panorámica del barrio La Isla de Tumaco (M. González, Tumaco, 1999)



Foto No. 2: **Mujer trabajando en la recolección de palma africana** (M. González, Tumaco, 1999)



Foto No. 3: **Hombre trabajando en el procesamiento de palma africana** (M. González, Tumaco, 1999)

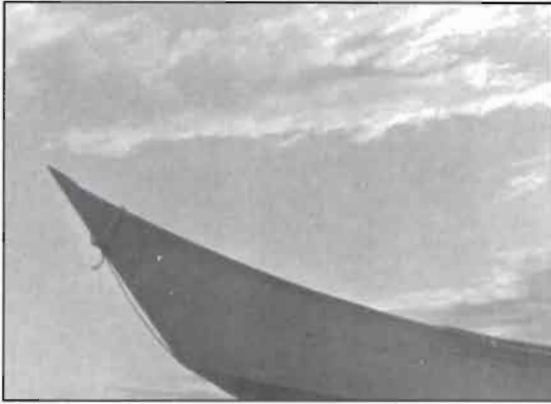


Foto No. 4: Proa de lancha, Río Mejicano, ensenada de Tumaco (M. González, Tumaco, 1999)



Foto No. 5: Mercado, Tumaco (M. González, Tumaco, 1999)

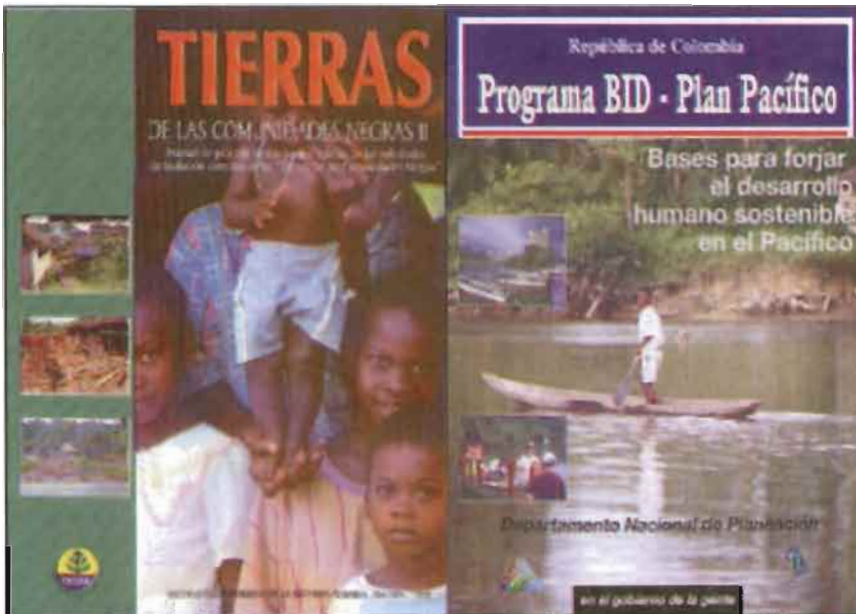


Ilustración No. 1: Publicaciones del Departamento Nacional de Planeación y del Incora (documentación C.E. Agudelo, 2002)

Gente Negra en Colombia

Dinámicas Sociopolíticas en Cali y el Pacífico

Olivier Barbary
Fernando Urrea
Editores



Editorial Lealon
CIDSE / UNIVALLE - IRD -
COLCIENCIAS